

que se ha vulnerado en la persona del quejoso la garantía á que se refiere el artículo 59 de la Constitución federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 3 del actual por el Juez de Distrito del Estado de México, que declara: que la Justicia federal ampara y protege al quejoso Claro Martínez contra la providencia dictada por el C. Gefe político de ese Distrito, que lo consignó al servicio de las armas.—Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los Ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio Altamirano.*—*Luis Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 24 de 1873.—*Lic Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado 2º de Distrito de México por D. Santiago Lartigue, contra una resolución del Ministerio de Relaciones, por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez.

El Promotor dice: que D. Santiago Lartigue, C. francés residente en esta Capital, interpone el recurso de amparo contra una determinación del C. Ministro de Relacio-

nes, en la cual se le ha negado el derecho que ante el mismo Ministerio intentó para que se le indemnizaran los perjuicios que cree haber resentido por las resoluciones dictadas por varias autoridades del Estado de Sonora en los años de 1853 y 1858, sobre una cuestión que tuvo entonces con la Sra. Batier, muger del solicitante de la indemnización por esos perjuicios, considerando violadas en su persona las garantías individuales que no se precisan exactamente en el ocursó, de las que consigna el Código Fundamental de la República, y solo menciona la referente al derecho de petición, que expresa el artículo 8º de la misma Constitución. Del informe rendido por la autoridad contra cuya determinación se interpone la queja, se deduce bien claramente que D. Santiago Lartigue después de haber ejercitado todos los recursos que conceden nuestras leyes á los ciudadanos de la República, sin lograr su objeto, intentó otro enteramente inusitado ante el Gobierno General, á quien ocurrió en la calidad de extranjero, pidiendo la indemnización que le fué denegada, y contra esta determinación interpone el recurso de amparo de una manera verdaderamente notable, por lo extraño de las razones que alega y la misma materia sobre que versa el caso en cuestión.

Conforme á la legislación universal que rige para reglamentar las condiciones de los extranjeros en el país en que residen, nunca pueden gozar de mayores derechos y prerogativas que los ciudadanos de la nación á que se hayan trasladado, sin desprenderse de la calidad de extranjero; y por consiguiente, cuando las leyes del país no conceden á los ciudadanos mas que cierta clase de derechos, es fuera de duda, que todo lo que traspase los límites de estos, debe considerarse como infundado y temerario. Por consiguiente, si conforme á la legislación tanto antigua como la actual, en negocios de la naturaleza del de Mr. Lartigue una vez que han recorrido toda la escala de los recursos que están establecidos, y que ha

ejercitado dicho Sr. segun demuestra el informe del C. Ministro de Relaciones, sin obtener el resultado propuesto, llegan á colocarse en la categoría de todos los casos humanos que se consideran imposibles de remediarse, porque es preciso que tengan un límite, del cual no deben pasarse. Así es que no concediendo nuestro Código fundamental á los mexicanos el derecho para que el Poder Ejecutivo de la Union les indemnisce de los perjuicios que les hayan causado las autoridades de los Estados, los extranjeros, que no pueden ser de una condicion mejor que los hijos del país, menos pueden tener ese derecho.

Por otra parte; la misma Constitucion establece en su artículo 117, que las facultades que no estan expresamente cometidas por ella á los funcionarios federales, se entienden reservadas á los Estados; de manera, que con sobrada razon el Ministerio de relaciones, al negarle al quejoso la indemnizacion que ha pretendido, ha obrado enteramente de acuerdo con este precepto constitucional, que le prohíbe ingerirse en lo que es de la competencia esclusiva de la soberanía del Estado de Sonora, ante cuyas autoridades ha gestionado el quejoso; y si estan agotados todos los recursos que ante ellas haya ejercitado, sin lograr el exito apetecido, sus negocios han tenido el caracter de cosa juzgada y por consecuencia final, su pretension ante este Juzgado 2º de Distrito es tan inusitada como improcedente, cuando interpone el recurso de amparo contra una determinacion del Ministerio de Relaciones que ha sido dictada en el ejercicio natural de su propia competencia. Por estas consideraciones, el que suscribe termina este pedimento en el sentido expresado, sobre que no es de otorgarse el amparo que solicita Santiago Lartigue, en razon de que el auto de que se queja no constituye violacion del artículo 8º de la Constitucion.

México, Febrero 28 de 1873.—*Francisco G. Moctezuma.*

Sentencia del C. Juez de Distrito

México, Abril 7 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo interpuesto por Santiago Lartigue, á virtud de reputar violada en su persona con el acuerdo del Ministerio de Relaciones de fecha 22 de Enero de 1872, las garantías que otorgan los artículos 8, 14, 20, fraccion 5ª, y 33 de la Constitucion federal; visto el informe del dicho Ministerio de Relaciones y justificante exhibido; lo pedido por el C. Promotor; los documentos y constancias presentadas por la parte quejosa y demas que verso convino; atendiendo á que la violacion para el efecto de otorgarse amparo, se hace consistir, en que habiendo sido víctima, segun califica el quejoso, que se llama extranjero, de un atentado por la autoridad del país, y habiendo pedido su reparacion ó indemnizacion ante los Tribunales, no la obtuvo, en cuya virtud y por ser extranjero, ocurrió al Gobierno Federal pidiendo la reparacion de esos perjuicios, á lo que el C. Presidente acordó, que el solicitante no tenia derecho á tal pretension: que en consecuencia, con tal acuerdo se habia violado en su persona la garantía que expresa le artículo 8º citado, y además los 14, 20, fraccion 5ª y 33.

Considerando: primero; que la resolucion del Supremo Gobierno, al determinar que el quejoso no tenia derecho á pretender reparacion por lo que llamaba agravios y perjuicios sufridos, no ha violado el artículo 8º, porque esta garantía no consiste en que al peticionario se resuelva en tal ó cual sentido, sino en que se omita el acuerdo, y el Supremo Gobierno, por conducto del Ministerio del ramo, lo que negó fué, no el derecho de peticion que en general la Constitucion otorga al hombre, sino en el caso, el especial de reclamacion, ya por la forma en que se entabla ó ya por la nacionalidad del peticionario que no estaba justificada, ó por estar en suspenso ese derecho á consecuencia de falta de relaciones diplomáticas en-

tre la República y la Nación Francesa de que Lartigue se titula súbdito.

Considerando: segundo; que la fraccion 5ª del artículo 20, no tiene relacion alguna al caso, pues tal garantía se refiere á las prerrogativas que el reo debe tener en todo juicio criminal, materia ni procedimientos de que se ha usado era objeto, ni pretendía el repetido Lartigue.

Considerando: tercero; que es patente la inconducencia para la violacion que se pretende efectuada, lo dispuesto en los artículos 14 y 33 que tambien se invocan; del primero, por que no se ha tratado de aplicar ley ó resolucion alguna anterior ó mal adecuada al hecho, y del segundo, por que este no está consignado como tal garantía individual, pues el mismo artículo detalla como tales para los extranjeros, solo los comprendidos del primero al veintinueve inclusive. Por tales consideraciones y por las razones que se expresan en la comunicacion de fojas 13 que para el efecto el Juzgado hace suyas, se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Santiago Lartigue, por no haberse efectuado con el acuerdo citado, violacion de las garantías individuales que el quejoso invoca. Hágase saber; remítase copia de ese fallo al Diario Oficial y Semanario Judicial; elévense los autos previa citacion fiscal, á la Corte Suprema de Justicia, para su revision. Lo decretó y firmó el O. Juez 2º de Distrito, Lic. José Mª Canalizo.—Doy fé.—*José M. Canalizo.*—*Manuel M. de Chavero*, secretario.
Es copia. México, Abril 9 de 1873.—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 13 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por D. Santiago Lartigue, ante el Juzgado 2º de Distrito de esta Ciudad, contra el acuerdo del Mi-

nisterio de Relaciones fecha 22 de Enero de 1872, relativa á que Lartigue no tiene derecho á pedir directamente por sí ante dicho Ministerio, la reparacion ó indemnizacion de los males que dice le han causado algunas autoridades mexicanas, con cuyo acuerdo dice el quejoso, se han vulnerado en su persona las garantías á que se refieren los artículos 8º, 14, 20 en su fraccion 5ª, y 33 de la Constitucion federal, y considerando: que el acuerdo del Ministerio de Relaciones no importa una violacion del artículo 8º de la Constitucion, porque la garantía á que se refiere, consiste en no impedir el derecho de peticion, y en que no se omita el acuerdo relativo á la peticion que alguno haga, así como en que se haga saber al interesado; y no se refiere á que el acuerdo sea en tal ó cual sentido; que la peticion presentada por Lartigue al Ministerio, fue recibida en él, y á ella recayó un acuerdo que se le hizo saber al mismo Lartigue, como el propio lo refiere y consta en el expediente; que tampoco puede decirse en el caso, que el acuerdo del Ministerio ataca la garantía que contiene el artículo 14 de la Constitucion, por que éste se refiere á que no se expidan leyes retroactivas y á que á nadie se le juzgue y sentencie sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicables á él por el Tribunal que previamente haya establecido la ley; que la fraccion 5ª del artículo 20 de la misma Constitucion se refiere, á que se oiga al acusado en juicio oral, defendiéndose por sí ó por persona de su confianza, ó por ambos segun voluntad, y á que en caso de no tener defensor se presente al acusado la lista de los defensores de oficio, para que elija el que ó los que le convengan, y Lartigue no figura como acusado; y considerando por último: que en el artículo 33 de la Constitucion federal, no está consignada como tal garantía individual pues él señala como tales para los extranjeros, sola las comprendidos desde el primero hasta el 29 inclusive en la fraccion 1ª tit. 1º de la propia Constitucion; por lo expuesto

y de conformidad con lo que dispone en su artículo 101, se decreta: que se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 7 de Abril último por el Juez 2º de Distrito de esta Ciudad, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Santiago Lartigue por no haberse efectuado con el acuerdo del Ministerio de Relaciones antes citado violacion de las garantías individuales que el quejoso invoca.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes, publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Artaga.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Ignacio Altamirano.*—*Luis Aguilar*, secretario.

Es copia, México, Mayo 29 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de México por Juan Balderas, contra su consignacion al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El promotor fiscal dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por el C. Juan Balderas, quejándose de que contra su voluntad fué destinado al servicio de las armas en el mes de Enero del año anterior, violándose en su persona la garantía que le

concede el artículo 5º de la Constitucion. Para comprobar que sostiene á su padre anciano y á una hermana, ha acompañado un certificado de cinco vecinos honrados que así lo acreditan; mas para el amparo, basta que exista la violencia que se hace al quejoso, de obligarlo á servir en el ejército contra su voluntad, infringiendo la garantía reclamada, hoy que no existen las facultades extraordinarias; por lo mismo, puede el Juzgado declarar, que la Justicia Federal ampara y protege al C. Juan Balderas.—México, Marzo 5 de 1873.—*Herrera Campos.*

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Abril 11 de 1873.—Visto el recurso de amparo promovido por Juan Balderas, con motivo de habersele destinado la servicio militar contra su voluntad, y sin embargo de ser el único apoyo de su familia, á la que mantiene con el producto de su trabajo; violándose por lo mismo el artículo 5º constitucional, y lo prevenido en la ley de 17 de Mayo último que exceptua del servicio del ejército á los que se encuentran en el caso y en las circunstancias que hace valer el quejoso en su favor. Vistos el informe de la autoridad responsable; lo que alega en defensa de aquel el Lic. C. Manuel Olaguibel y demas constancias de autos á que en lo necesario me refiero, y considerando: que por la prueba testimonial que ha producido el quejoso, resulta probada la excepcion en que funda su reclamo, y de conformidad con lo pedido por el C. promotor fiscal, debia declarar y declaro: que la Justicia de la Union ampara y protege á Juan Balderas contra el acto que dió origen á este recurso. Notifíquese la sentencia y publicada en la forma acostumbrada, dése cuenta á la Corte Suprema de Jus-